AL REDEDOR DE LA INDEPENDENCIA

JOSE CORONEL URTECHO

POETA-HISTORIADOR
NICARAGUENSE

LA HISTORIA COMO GUERRA CIVIL

Lo que le da un carácter trágico a la independencia de Centro América es que a pesar de haberse realizado pacíficamente, trajo de todos modos la guerra civil. Hay quienes piensan que si se hubiera conquistado por medio de las armas, se habría asegurado la unidad y la paz de las provincias que componían la Capitanía General de Guatemala. Aunque la experiencia de otras regiones hispanoamericanas no estimula a pensar de ese modo, todo está en la medida de lo posible. Pero probablemente no se hubiera podido evitar la anarquía o salir pronto de ella, sin resignarse a la dictadura. La misma resistencia a la dictadura contribuiría, por supuesto, a mantener el estado de guerra civil permanente, pero no es menos cierto que el estado de guerra civil permanente daba lugar a la dictadura. Tal era el círculo vicioso que se produjo como resultado de la independencia. Sólo por un milagro de cordura humana podían eludirse en las circunstancias de Centro América los dos extremos de la anarquía y la dictadura.

La infinidad de causas aducidas por los historiadores para explicar la trágica situación —antecedentes coloniales federalismo, debilidad constitucional del Poder Ejecutivo, carencia de un distrito federal, pasiones de los hombres, etc., etc.— por más que aclaren ciertos aspectos particulares, no contribuyen mucho a esclarecer el carácter fatal y permanente de la guerra civil en que ha vivido casi toda Centro América desde la independencia. Es necesario reconocer que fue la propia independencia la que determinó la situación. No hay ningún fatalismo, ni determinismo histórico en esta simple constatación del hecho. En otras circunstancias, desde

luego, la independencia pudo haber producido otros efectos. Gaínza, Iturbide, Filisola, Arce, Morazán mismo, pudieron haber sido otros hombres o corrido otra suerte. Pero evidentemente no es esa la cuestión.

Consideradas las circunstancias y los hombres que actuaban en ellas, las ideas, pasiones e intereses que entraban en conflicto, lo mismo que los antecedentes históricos de Centro América, la independencia tal como se produjo en Guatemala el 15 de Septiembre de 1821, seguida de la consulta a las provincias y los ayuntamientos, vino a ser en la práctica como una invitación a la guerra civil. La misma independencia fue ya el primer efecto de un estado de guerra civil latente en Centro América. En algunas ciudades, como Guatemala, San Salvador y Granada de Nicaragua, había seguramente un clima favorable a la guerra civil. En cierto modo puede afirmarse que, por lo menos desde 1810, ya existía en algunos lugares lo que hoy llamamos una guerra fría.

La verdadera guerra civil, sin embargo, sólo rompió los diques cuando la independencia empezó a practicarse tal como se la entendía en cada lugar y momento. Desde entonces, todo en última instancia quedó planteado en ese terreno, aun los esfuerzos por escapar de semejante situación. La última instancia dejó de ser el rey, la voluntad del pueblo expresada en las leyes. En tales condiciones, la última instancia no podía ser otra que la guerra civil. La historia misma empezó a vivirse y a concebirse como guerra civil.

EL HILO DE LOS HECHOS: 1811 — 1821

El verdadero mérito de los independentistas centroamericanos o, si se quiere, su principal habilidad, consistió en mantener en paz a Centro América hasta la proclamación de la independencia mexicana y proclamar ellos solos, en el momento más oportuno, su propia independencia, de acuerdo con las autoridades peninsulares. En esto estuvo, por lo menos, la originalidad de la independencia centroamericana. De no haber sido así, las tropas de Iturbide hubieran libertado a Centro América y ésta habría quedado, probablemente, incorporada a México, como de todos modos estuvo a punto de quedarlo. Así quedó la provincia de Chiapas que se había adherido por adelantado al Plan de Iguala.

Cuando Fernando VII —que gozaba como príncipe de extraordinaria popularidad en la península— cayó en poder de Napoleón y fue internado en Valenzay, la reacción popular en Centro América, como en toda la América española, no pudo serle más favorable. También para los americanos fue, a la letra, El Deseado. Los indios, los artesanos, los hacendados, la gente de éstos, los comerciantes, el clero, la mayoría de los intelectuales, todos estaban por el rey y con España en contra de los franceses. Si había republicanos independentistas en Guatemala, en 1818, eran tan pocos y sin importancia que aún apenas se sabe quiénes eran. Las rebeliones de las ciudades centroamericanas contra

las autoridades peninsulares, no comenzaron hasta muy avanzado el año 1811. Las de alguna importancia no pasaron de cuatro —San Salvador, León, Masaya, Granada— y probablemente obedecieron a un plan más o menos concertado y fomentado desde fuera, para deponer o comprometer al nuevo Capitán General, don José Bustamante y Guerra, nombrado en 1810 por la Regencia y llegado a Guatemala en marzo de 1811.

Para aclarar esos movimientos sería interesante averiguar si los patriotas criollos obedecían instrucciones de agentes extranjeros. Es, por eso, una lástima, que el historiador Gámez tan sólo se limite a señalar indirectamente la intervención de la masonería. De todos modos es, por lo menos, curioso que el Cabildo de Granada haya propuesto al Ayuntamiento de Guatemala que se abstuviese de dar posesión a Bustamante. A principios del año de los levantamientos se supo en Guatemala el grito de Dolores que despertaba un sentimiento de emulación en los espíritus más avanzados y simpatías por los rebeldes mexicanos en los constitucionalistas guatemaltecos. El mismo año llegaba a Guatemala el canónigo Castilla, cuya influencia sería decisiva en la preparación política de la independencia. No debemos soltar estos cabos si es que tratamos de entender la trama de la política independentista en Centro América.

Parece que Bustamante era realmente, como lo pintan los historiadores, un hombre de carácter violento y despótico, aunque a menudo daba muestras de saber dominarse. Como marino había dado la vuelta al mundo y como militar defendido a Montevideo contra los ingleses. Tenía naturalmente la dureza y los instintos autoritarios del soldado. Recientemente había participado en la sublevación del pueblo madrileño contra los franceses, el 2 de mayo de 1808. Llegaba, pues, a Guatemala con toda la exaltación de su patriotismo español, aborreciendo las ideas revolucionarias, aunque no fuesen más que constitucionalistas, y desconfiando del patriotismo local de los criollos. Uno de sus primeros actos fue encarcelar a Cordovita, Secretario del Ayuntamiento, por haber expresado en una conversación sus simpatías por la independencia. Para sacarlo de la cárcel, donde llevaba dos o tres meses, la Real Audiencia tuvo por compurgadas "la irreflexión y ligereza" del futuro prócer y ordenó su traslado al Colegio de Cristo con el objeto de que allí hiciera los ejercicios espirituales durante un mes, y volviera contrito a su casa. Cordovita salió, por supuesto, algo más cauto, pero confirmado en su nacimiento fe independentista.

En aquellos días de perplejidad intelectual y política, la Inquisición —que anteriormente había recibido denuncias contra Cordovita— trataba a los intelectuales con significativa lenidad y lo mismo la Audiencia. Bustamante llegaba en un temple distinto al de los tribunales y organismos de gobierno local. Después del incidente referido, cada vez que se presentaba al Ayuntamiento a discutir con el cabildo asuntos de importancia, exigía que el secreta-

rio Cordovita se retirara del recinto. El municipio, prevenido en contra de Bustamante desde antes de su llegada, no lo había recibido con la magnificencia y cordialidad que a sus predecesores. Hubo desde el principio las consabidas quisquillosidades protocolarias a las que se mostraba tan sensible entonces el mundillo oficial de Guatemala. Una de las quejas de los municipales contra el nuevo Capitán General y su esposa la condesa, era que no invitaban a sus salones a la nobleza criolla. Aquel Ayuntamiento —el mismo que suscribió las instrucciones dadas a Larrazábal— lo integraba una mayoría constitucionalista, y cuando Bustamante, en su manifiesto inaugural, requirió sus consejos para el mejor desempeño de su cargo, le contestaron que la salvación de las provincias dependía del establecimiento de un régimen constitucional. También algunos municipios provincianos se manifestaban inquietos e inconformes con las autoridades peninsulares. Por la ausencia del rey sentían que la autoridad recaía en el pueblo, de acuerdo con la antigua tradición democrática de las ciudades y poblaciones españolas, revivida en la guerra de la independencia, tanto en España como en Sur América. El momento parecía propicio, pero las sublevaciones no fueron espontáneas. Las minorías que las dirigieron, siguiendo el mismo estilo de las correspondientes rebeliones suramericanas, levantaron alguna gente y aquietaron a otras con manifestaciones de lealtad al rey ausente.

Empezaron por la ciudad de San Salvador, el 5 de noviembre de 1811. Encabezaba la revuelta, como se sabe, el presbítero Delgado, con algunos miembros de su familia, entre ellos su sobrino don Manuel José Arce y los tres curas Aguilares. "Aquellos curas y criollos de San Salvador —dice Gámez— como personas leídas, prestigiosas, caracterizadas y de buen seso, se pusieron a la cabeza de los suyos y conspiraron en la esfera que les era únicamente posible. Estaban de boga en las demás colonias las Juntas de Gobierno provinciales en defensa del Rey cautivo, y a ellas, que se citaban con elogio, apelaron los noveles revolucionarios, que nada tenían de incapaces, ni de aturdidos, para meterse en honduras imposibles y odiosas contra el Rey amado". El historiador Villacorta cuenta que "por la mañana, al toque de la campana de la Iglesia de la Merced que era la señal convenida, y en cuanto se había reunido alguna gente, se dirigieron, al grito de Viva Fernando VII, a casa del Intendente, a quien encontraron desprevenido y redujeron a prisión, lo mismo que a los demás empleados públicos, procediendo enseguida a instalar una Junta en la Casa del Ayuntamiento, que reconocieron los habitantes de la ciudad y los pueblos vecinos, así como los demás que se habían comprometido a hacerlo". Sin embargo, Santa Ana, San Vicente, San Miguel y Sonsonate, invitados a adherirse al movimiento, se negaron. Con esto, según Marure, historiador cercano a los sucesos, "se llenaron de desaliento y abandonaron una empresa a que habían dado principio invocando el nombre de Fernando VII".

El día 13 del mismo mes, un mercedario, Fray Benito Miguelena —comprometido dos años después en la conspiración independentista del convento de Belén en Guatemala— encabezaba un movimiento similar en León de Nicaragua, con el objeto de deponeer al Intendente don José Salvador y sustituirlo por el obispo García Jerez, muy querido de los leoneses. El Capitán General reconoció al nuevo Intendente de Nicaragua, cuya lealtad al rey era indudable, y desde entonces Bustamante mantuvo las mejores relaciones con el obispo. Los alborotos de los indígenas de Masaya, ocurridos en diciembre, poco después de lo de León, se atribuyeron a don José Gabriel O'Horan, a quien los indios de Momimbó seguían ciegamente. El historiador nicaragüense don Jerónimo Pérez, afirma que O'Horan "era el ídolo del pueblo indígena, que lo pedía de Juez, ya que no podía proclamarlo Rey". Don José Gabriel pertenecía a una familia yucateca de origen irlandés, cuyo papel en la independencia y en la política posterior de Centro América —apenas investigado— parece de lo más interesante. Don Tomás O'Horan, con Arce y Valle, integró el triunvirato que la Primera Asamblea Constituyente estableció como Poder Ejecutivo Provisional. Se dice que los O'Horan fueron acérrimos antiespañolistas. Bustamante no creyó que los acontecimientos de Masaya hubieran sido instigados por agente de Francia, como creía de los otros. Anteriormente, sin embargo, uno de los O'Horan había figurado en una lista de masones enviada desde Guatemala al Consejo de Indias. De todos modos, don José Gabriel fue conducido preso a Guatemala con más rigor que los anteriores cabecillas de sublevación. El rigor de Bustamante llegó a su extremo con el levantamiento de Granada en esos mismos días.

Este fue el gran suceso de aquella época, en opinión de Salazar. Dos factores extraños a la tendencia antiespañolista complicaron ese movimiento, dándole ciertas características originales. Por una parte, la antigua rivalidad entre las dos ciudades importantes de Nicaragua en la colonia, León y Granada, y por otra, divisiones relativamente recientes entre los principales granadinos. Al novelista nicaragüense José Román se debe la sugerencia de que la rivalidad de granadinos y leoneses es anterior a la fundación de ambas ciudades, ya que la gente de Pedrarias, llegada a Nicaragua con Hernández de Córdoba estaba dividida en dos grupos rivales, uno de los cuales fundó Granada y el otro León. Sea de esto lo que fuere, no era, indudablemente, cosa de ayer. Pero en el orden colonial, con la autoridad del rey por encima de toda disputa, la rivalidad de las dos ciudades nicaragüenses no llegó a manifestarse como guerra civil, sino que más bien constituía una emulación saludable para la formación del país en dos regiones vigorosas de distinto carácter. Cuando la autoridad empezó a ser objeto de disputa durante la agitación del año 11, la vieja rivalidad empezó a revelar síntomas de virulencia.

Era entonces Alcalde Primero de Granada don Roberto Sacasa, a quien, según Villacorta, "molestó mucho aquel tumulto de León". Hizo reunir el cabildo para manifestar su desacuerdo y reservarse el reconocimiento de la Junta nombrada por los leoneses. Don Roberto, hijo del peninsular don Francisco Sacasa y padre de don Crisanto —contra quien empezó la guerra civil de Nicaragua después de la independencia— era en aquella época el jefe de la principalísima familia granadina de los Sacacas, cuya importancia en la política posterior de su país sólo admite comparación con la familia Chamorro. En ese tiempo los Sacacas eran aún más importantes en Granada que los Chamorros. Estos últimos, con los Zavalas, Vigiles y otros criollos, componían el bando de la encrucijada —un primer balbuceo político de lo que significó después la calle atravesada— que, en cierto modo, presidían los Sacacas y que, aparentemente, mantenían relaciones cordiales con las autoridades peninsulares. Tanto don Roberto como su hijo don Crisanto ocupaban algunos cargos civiles o militares en la Administración colonial y eran, por otra parte, los principales comerciantes del país. Don Roberto afirmaba, según don Jerónimo Pérez, que "ninguno en todo el reino tenía propiedades raíces más valiosas que las suyas". Los Chamorros y demás personajes de la encrucijada figuraban más bien entre los hacendados comerciantes que entre los dueños de almacenes —con excepciones, naturalmente, que los historiadores no han señalado, como tampoco han esclarecido la verdadera significación de aquellas divisiones— pero el grupo jugaba una política de moderación y de equilibrio que perseguía el beneficio de sus intereses económicos sin comprometerlos. Más o menos leales a Fernando VII e inclinados indudablemente al constitucionalismo, no veían, sin embargo, con malos ojos las probabilidades de la independencia, aunque tampoco estaban dispuestos a ponerse mal con las autoridades peninsulares. Don Jerónimo Pérez asegura que don Crisanto Sacasa era "republicano de corazón", pero esto hay que tomarlo con un grano de sal, como dicen los ingleses. Ni don Crisanto, ni su padre don Roberto eran ideólogos románticos, y miraban el asunto con gran sentido práctico. El mismo Pérez dice que "los dos opinaban que la cuestión de la independencia debía resolverse en el Norte y en el Sur de la América". Antes de esto ha pintado el historiador, con su infalible candidez, un retrato casi perfecto del hombre de mostrador haciendo cálculos políticos. "Don Roberto —escribe Pérez— dotado de mucha previsión, desde que vio la exaltación de los republicanos, que los llevaría a la vía de los hechos, calculó el resultado, y viendo en ello un sacrificio estéril, no quiso comprometerse, e influía en su hijo para obrar de acuerdo". Padre e hijo obraron, en efecto, de acuerdo con sus cálculos.

Don Crisanto se negó a firmar un acta de los levantiscos y don Roberto, pasada la revuelta, le regaló al gobierno español la casa que hoy ocupa el municipio de Granada. Otros señores de la encrucijada, parece que se dejaron arrastrar por las

pasiones del momento y enseguida sufrieron la dura represión de Bustamante. Los Sacasas, que no perdieron el equilibrio, recibieron el tratamiento que era de esperarse. El propio enviado de Bustamante, un tal Carrascosa, a quien los historiadores presentan como un hombre feroz, guardó para con la familia Sacasa, según lo dice Pérez, las mayores consideraciones, mientras se ensañaba contra la mayoría de las familias granadinas. “Esta excepción —agrega Pérez— produjo su efecto natural en el ánimo de los patriotas: la irritación contra los Sacasas” Es curioso que esa expresión aparezca en cursiva en la edición de las Obras Históricas completas del Licenciado Jerónimo Pérez impresa en 1928, ya que la irritación contra los Sacasas ha sido en otras ocasiones factor no desdeñable en la política nicaragüense. En tiempos del primer don Roberto, los Sacasas estaban, como quien dice, a la cabeza del círculo más “conservador” de Granada. El único liberal medio revolucionario de la familia era entonces don José Sacasa, hijo de don Crisanto y al que daban el nombre de El Pepe. Este era tan fogoso como inteligente y se había distinguido como diputado en las Cortes de Cádiz. Había recibido su educación en Guatemala y en España y regresó de Cádiz desengañado del constitucionalismo monárquico y partidario de la independencia y de la democracia republicana. Pero El Pepe, con su carácter y sus ideas, no se pudo entender con su respetable familia granadina y se marchó a vivir al Salvador. El Pepe era un intelectual y los Sacasas eran entonces comerciantes conservadores.

Los de la encrucijada tenían en su contra a un grupo de familias granadinas —Argüellos, Cerdas, Espinosas, Marencos, Vargas y otros— al que llamaban los de arriba, por la parte de la ciudad donde vivían los más de ellos. Económica y socialmente, lo mismo que por sus cargos en la Administración o sus conexiones con los peninsulares del gobierno, los de la encrucijada ocupaban, al parecer, una posición más alta que los de arriba —en general hacendados modestos no comerciantes— pero está muy de acuerdo con el carácter granadino, llamar de arriba a los que tienen por de abajo. A los de arriba los movía, sobre todo, su hostilidad a los peninsulares, en la cual envolvían a los de la encrucijada. Pocos años antes se había intentado una fea maniobra contra don Crisanto, instigada, según se creyó entonces, por algunos de sus enemigos. Con ocasión de un viaje a Cartagena y luego a la isla de San Andrés, se acusó al honorable caballero de haber introducido clandestinamente a su hacienda Tolistagua parte de un cargamento de mercaderías inglesas compradas en sus viajes. Los murmuradores comentaban, entre otras pequeñeces, “que don Crisanto —como dice Pérez— había obsequiado un corte de gaza bordado de oro y un pañuelo de lo mismo a la hija de don Carlos Morales, Administrador de Alcabalas de León”. Las denuncias de contrabandos, como ya se ha dicho, eran frecuentes en ese tiempo contra los principales comerciantes, pero aparte del escándalo que este caso produjo en Granada, la familia Sacasa salió completamente reinvin-

dicada por las autoridades de Guatemala, no obstante la severidad con que se perseguía a los contrabandistas del gran comercio. Aquello fue, de todos modos, una de las causas de la división entre los granadinos. Era un síntoma de lucha económica y social entre los mismos criollos de Granada.

Tal era, pues, la situación de la ciudad cuando se supo en ella la noticia de la sublevación de los leoneses contra las autoridades peninsulares. El 16 de diciembre, el Ayuntamiento, presidido por don Roberto Sacasa, renovó el juramento de fidelidad a Fernando VII. El 19 fue la negativa de adherirse al movimiento de León y de reconocer a la nueva Junta Provisional. Pero otros miembros del Ayuntamiento pertenecían al bando de los de arriba, y el 22 de diciembre, don Juan Argüello, secundado por el Regidor don Manuel Antonio de la Cerda, reunió al pueblo en un tumultuoso cabildo abierto que depuso a todos los empleados peninsulares obligándolos a refugiarse en Masaya. Durante cinco meses, Granada se gobernó en la práctica como una ciudad-estado, sin rebelarse contra el rey o contra España, ni desconocer a las autoridades superiores del reino, pero encastillada en sí misma, obedeciendo sólo su propia ley, aislada en realidad de la provincia y apercebida para la defensa, como lo estaría muchas otras veces, en peores condiciones, después de la independencia. Tanto el peligro, como el patriotismo local unieron en aquella ocasión, como en otras, a la mayoría de los granadinos.

Cuando las autoridades depuestas reunieron en Masaya las tropas necesarias —gentes de armas traídas de Honduras y de Nueva Segovia— se presentaron ante la ciudad rebelde el 12 de abril de 1812, bajo el mando de un Sargento Mayor, Pedro Gutiérrez, que ha dejado una impresión de mesura y sensatez. Los granadinos resistieron y duró el fuego todo ese día. Esa fue, según Gámez, “la primera sangre centroamericana por nuestra emancipación de España”. En realidad no era tal la intención de la gente de Granada y aquella sangre fue más bien un adelanto de la que luego se derramaría periódicamente —comenzando por la de don Crisanto Sacasa y la de don Manuel Antonio de la Cerda— por las discordias civiles de Nicaragua. Es verdad, sin embargo, que la sangre de aquellos granadinos, segovianos y hondureños, ayudó a preparar la independencia. Aún fue más decisiva en este sentido la conducta del Capitán General Bustamante. El 25 de abril se rindió la ciudad, firmándose una capitulación para la entrega de las armas a cambio de la amnistía general y completa. Pedro Gutiérrez la suscribió en nombre del rey y del Capitán General, reservándose únicamente la aprobación de Bustamante. Este anuló en seguida lo pactado. Los granadinos fueron tratados con extremo rigor, que si no enteramente ilegal, era increíblemente impolítico, sobre todo después de la benignidad del mismo Bustamante para con los rebeldes de San Salvador y León. El cambio de frente resultaba desconcertante y no hizo más que acrecentar la irritación antiespañolista en perjuicio de España y del rey cautivo. Cuando el rigor de la jus-

ticia sirve a una causa vacilante y confusa, resulta más contraproducente que la lenidad. Los granadinos hicieron constar en la capitulación que no habían “infringido los principios del gobierno que regían a la monarquía española”. En substancia, esto equivalía a lo consignado en el acta de los rebeldes leoneses sobre el objeto de su movimiento, que era “el defender la sagrada religión católica, reconocer la subordinación, obediencia y homenaje debidos al Rey Fernando VII y demás potestades”. En Granada se decía que el Obispo García Jerez había escrito a Bustamante: “si me desterrasen a un leonés, dejaría de ser Obispo y Gobernador de Nicaragua”. Más de ciento cincuenta granadinos fueron, sin embargo, condenados a las penas más graves, entre ellas la de muerte para dieciséis cabeceallas, empezando por Argüello y Ceida. Aunque luego les conmutaron el castigo por el de prisión perpetua, no se borró la impresión de su condena a la pena capital. Los sufrimientos que padecieron alimentaron una terrible propaganda contra el régimen español. Carrascosa, el hombre de mano de Bustamante, destinado a Granada para seguir la investigación durante el proceso, adquirió fama de bárbaro por su comportamiento con los presos y sus familias. Los condenados fueron conducidos por tierra hasta Guatemala, cadena al pie, de la cárcel de un pueblo a la de otro, y su llegada a Guatemala, en grito de 1813, fue un espectáculo entristecedor que aprovecharon los independentistas para influir en los ánimos. Varios reos murieron en las prisiones. Cerda y Argüello, trasladados a Cádiz, recobraron la libertad con la amnistía concedida por el rey en 1817 y salieron de la cárcel enteramente convencidos de la necesidad de la independencia.

Los independentes más inteligentes, si acaso habían instigado las sublevaciones de las ciudades, pronto comprenderían que en realidad llevaban a la guerra civil. Concluida la de Granada en abril de 1812, no volvieron en efecto a producirse. Ya desde entonces probablemente comenzaría a madurar en las mentes más finas la política que condujo a la independencia pacífica. Pero todas las acciones violentas inician una cadena de represiones y reacciones que no es posible detener. Los acontecimientos del año once y la severa represión de Bustamante produjeron las conspiraciones de fines del año trece y principios del catorce. Ninguna de ellas tuvo, al parecer, verdadera importancia, salvo la del convento de Belén, en Guatemala, descubierta en diciembre de 1813, dos años después de las sublevaciones contra las autoridades peninsulares en las ciudades provincianas. Gámez opina que tampoco esa tuvo los caracteres que le dio Bustamante, pero el guatemalteco Villacorta dice que los conspiradores del convento mercedario “tuvieron en mira el cambio de Gobierno y según se presentasen las circunstancias, proclamar la independencia de la Capitanía General, imitando con ello el noble gesto que en esos mismos meses hacía Morelos en la Nueva España”. Aunque salir de Bustamante era el primer objetivo de los criollos, ya fuesen in-

dependientes o constitucionalistas, la conspiración de Belén no parece haber contado —como tampoco la de San Salvador y la de Granada en esos días— con la aprobación de los más inteligentes y equilibrados partidarios de la independencia. El autor de las Memorias de Jalapa, don Manuel Montufar y Coronado, miembro de la Tertulia Patriótica del canónigo Castilla, escribía perdido su crédito mezclándose en las juntas de Betlem, con hombres sin luces, sin crédito y sin costumbres. . .”

A pesar de las vacilaciones y medias vueltas a que sin duda le obligaban los vaivenes de la situación política en España, Bustamante imponía cada vez más su poder, en cierto modo dictatorial. En lugar, por lo tanto, de provocar rebeliones o alimentar conspiraciones que justificaran los procedimientos dictatoriales del Capitán General, independentista y constitucionalistas buscaban ahora una manera de obtener del gobierno español la destitución de Bustamante. Esa fue, al parecer, la consigna de los dirigentes intelectuales y comerciantes hasta lograr el éxito. Cuatro años, sin embargo, duró aún el gobierno de Bustamante. Todavía se movían las cosas con lentitud para el espectador de ahora, pero la agonía de la colonia fue rapidísima si se le mira desde la misma vida colonial en que el tiempo tenía otro sentido que para nosotros y discurría con otro ritmo. Este empezaba ya a acelerarse. En 1812 se juraba la Constitución. El mismo año se elegía popularmente un Ayuntamiento con representación de todas las tendencias. En 1813 llegaban los presos de Granada, se descubría la conspiración de Belén, se castigaba duramente a los comprometidos y supuestos comprometidos —sin aplicarles, sin embargo, la pena de muerte— tomaba posesión el nuevo Ayuntamiento, entraba en choque con Bustamante y, además, con el Arzobispo. Nadie quedaba satisfecho de nada, ni contento con nadie —ni con el cabildo, ni con el jefe del gobierno, ni con la jerarquía eclesiástica. Era evidente que había comenzado la era de la política.

Pero una mano experta siguió apuntando con el índice la dirección segura. Las quejas contra Bustamante se multiplicaban. Le acusaban, entre otras muchas cosas, de tener una red de espionaje y de violar la correspondencia oficial y particular, lo mismo la de un Oidor de la Audiencia que la de casas comerciales tan respetables como las de Aycoy y Beltranena, a las cuales, además acusaba por contrabandos. El Ayuntamiento señalaba a don José Cecilio del Valle —esperanza de los artesanos y los españoles— como agente de una intriga con los ayuntamientos de provincia, encaminada a pedir al gobierno superior “la perpetuidad en el mando del actual jefe”. El ayuntamiento de Guatemala pedía, en cambio, oficialmente, que se desechase la propuesta de los cabildos, es decir, que se destituyese a Bustamante. Se le denunciaba, sobre todo, por su “oposición al entable de la Constitución”, según lo expresaba el acta municipal del 27 de agosto de 1813. El 22 de agosto de 1814 regresaba Fernando VII a la península y el 4 de mayo repudiaba la Constitución, restableciendo el ab-

solutismo. Esto salvó a Bustamante que acababa de ser destituido por la Regencia. La contraproducente política represiva de Fernando en España fue secundada por Bustamante en Guatemala con los mismos efectos. Sus opositores parecieron vencidos y aun aplastados por algún tiempo, aunque siguieron intrigando hábilmente en la Corte donde no les faltaban amigos influyentes. Muchos de los actos de represión del llamado tirano de Guatemala no eran sino gestos vacíos. Hizo restablecer el Ayuntamiento de 1808, pero sólo simbólicamente, porque la mayoría de sus miembros habían muerto o se hallaban ausentes. Pidió que se quitaran de la sala capitular del cabildo los retratos de tres notables constitucionalistas. Mandó quemar en la plaza pública las Instrucciones dadas por el Ayuntamiento en 1811 a su diputado Larrazábal. Nada de eso pudo salvarlo de las maniobras de sus opositores. “Corría el mes de diciembre de 1817 —escribe Salazar— cuando una mañana, como a las diez del día el pueblo vio que la Plaza y el Palacio estaban coronados de soldados y cañones, y las guardias dobladas y sobre las armas; era que en completo desacuerdo con la Audiencia, Bustamante se oponía a que se abriese un pliego de Su Majestad, que lo había destituido, ignominiosamente...”. Pero contra la voluntad del rey nada valían despliegues de armas. La única forma en que Bustamante pudo haber conservado el poder por algún tiempo más, hubiera sido proclamando la independencia. Pero él no era don Gabino Gaínza. Era sólo un soldado leal a su rey, un poco testarudo y voluntarioso. No parecía, desde luego, un “monstruo de despotismo”, como le llamaba un diputado de su tiempo. Posiblemente Valle le aconsejaba moderación, pues a menudo se moderaba. “Hay que decir —dice Salazar— en descargo de Bustamante, que no aplicó tan rigurosas penas, y que yo sepa, jamás manchó sus manos con sangre de patriotas”. El 28 de marzo de 1818, Bustamante entregaba el gobierno a don Carlos de Urrutia.

A Urrutia lo presentan los historiadores como un abuelo medio puritano y bastante achacoso. Por sus proclamas y sus actos se ve que era un buen viejo, sin restos ya de capacidad para manejar una situación complicada. Llegaba con instrucciones de reparar los agravios de Bustamante y de seguir, según parece, una política conciliadora. Su primer acto fue restablecer solemnemente, con asistencia de la nobleza criolla, el Ayuntamiento de 1810, que su antecesor había desmembrado “Aquel acto —dice el historiador Villacorta— pareció haber borrado las diferencias entre peninsulares y criollos, y durante los dos años subsiguientes reinó otra vez la paz en los confines de la Capitanía General de Guatemala, bajo la administración semipatriarcal del se-

ñor Urrutia”. Sin exagerar la armonía entre los unos y los otros, es indudable que se iniciaba por ambas partes una política civilista, como hoy decimos, o como dice el historiador Salazar, una política “de condescendencias”. De parte del gobierno se volvía a mostrar simpatías por los partidarios de la monarquía constitucional y ninguna aversión al trato con personajes conocidos como amigos de la independencia; mientras de parte de estos últimos se traslucía el propósito de entenderse hábilmente con las autoridades para lograr la independencia en el momento oportuno. No se necesitaba mucha clarividencia para comprender —como lo comprendían don Roberto y don Crisanto Sacasa en Nicaragua— que la suerte de Centro América se decidiría en México o Sur América, pero los intelectuales y comerciantes independentistas de Guatemala parecían ahora empeñados en evitarse una guerra en su suelo y conseguir su propia independencia valiéndose de la intriga. Todo, pues, consistía en preparar el terreno y esperar la ocasión.

El 5 de mayo de 1820 se supo en Guatemala, por noticias de La Habana, que Fernando VII había jurado la Constitución, a raíz del levantamiento de Riego. La novedad produjo manifestaciones de alegría entre los criollos de la capital y sus seguidores. El anciano Capitán General dio, sin embargo, muestras de firmeza y previsión, desplegando preparativos militares y haciendo responsables a los ayuntamientos de la tranquilidad en las provincias. Si los independentistas ignoraban que el buen viejo fuera capaz de tales arrestos, seguramente los tomaron en cuenta para planear su futura estrategia. El 27 de junio confirmó Urrutia el restablecimiento del régimen constitucional y el 9 de julio se juró la Constitución en Guatemala. Lo interesante es que ahora el Gobierno de Madrid se va a inclinar en cierto modo al lado de los criollos, no sólo constitucionalistas sino también independentistas, mientras la mayoría del pueblo responsable de Guatemala, es decir, los obreros artesanos, apoyarán a los peninsulares y españolistas no partidarios de la independencia. Ante tal disyuntiva el Presidente Urrutia jugará una política de equilibrio difícil, apoyando al partido españolista y a la vez procurando no malquistarse con los antiespañolistas. Fue entonces que empezaron a funcionar los dos partidos del momento: los caicos, encabezados por el doctor Molina, pero dirigidos desde la Tertulia Patriótica que se reunía en casa del canónigo Castilla, y los gasistas de Valle. Ya se explicó en su oportunidad qué clase de elementos integraban esos partidos y a qué causas economicas debían principalmente sus orígenes. Ahora empezaron a tomar posiciones para una lucha en cuyo fondo se agitaba la cuestión de la independencia.

LOS CLERIGOS Y LA INDEPENDENCIA

Los clérigos que figuraron en el proceso de la independencia, ya sea como constitucionalistas monárquicos, ya como independentistas republicanos, lo hicieron más como intelectuales que como clérigos. En buena parte, sin embargo, la extraordina-

ria influencia que algunos de ellos ejercieron sobre los intelectuales laicos, debe atribuirse al prestigio colonial de la sotana. Es una lástima que los historiadores sólo se hayan ocupado hasta ahora de la actuación pública de los principales, como Delgado,

Larrazábal o Castilla, sin estudiar lo suficiente su formación intelectual, ni esclarecer los móviles de su conducta.

El caso del presbítero salvadoreño don Matías Delgado, no obstante la importancia del personaje en la política centroamericana de su tiempo, es demasiado personal y complejo para representar tendencias generales. No está bien claro, por otra parte, si su independentismo es anterior o posterior a la insurrección de San Salvador en 1811 contra las autoridades peninsulares de la localidad y al grito de "Viva Fernando VII". Tampoco puede asegurarse que sus pretensiones a la mitra salvadoreña y sus rebeldías prácticamente cismáticas frente a Roma, revelen que le movía desde el principio la ambición personal. El mito de la independencia, tal como fue elaborado por los próceres liberales y perfeccionado enseguida por los historiadores del mismo credo político, hizo del revoltoso clérigo una figura poco menos que incomprensible. Es todavía un misterio hasta dónde condujo los acontecimientos desde sus ideas o fue conducido hacia éstas por aquéllos.

Más claramente representan las dos tendencias políticas en que se dividieron los clérigos intelectuales durante la gestación de la independencia, Larrazábal y Castilla. El presbítero don Antonio de Larrazábal, diputado por Guatemala en las Cortes de Cádiz, era el constitucionalista típico. Las ideas de su grupo están contenidas en unas "Ilustraciones para la Constitución Fundamental de la Monarquía Española y su Gobierno", que fueron redactadas en 1810 por don José María Peinado, regidor perpetuo y decano del Ayuntamiento guatemalteco y dadas por esta corporación a Larrazábal. "No se habían desligado aún —escribe Salazar resumiendo aquellas ideas— de muchas preocupaciones sociales y religiosas, por más que en el fondo se conoce que eran discípulos de Rousseau y los enciclopedistas. Ellos querían que "la religión de Jesucristo Crucificado, católica, apostólica, romana se conservase inviolable en toda la monarquía como la única verdadera, y no contentos con eso, deseaban se impetrase de la Santa Sede el que se declarara el misterio de la concepción sin pecado y que la nación se acogiese bajo el patrocinio de la Virgen; sin perjuicio de que Guatemala siguiese reconociendo al Apóstol Santiago y a Santa Teresa como patronos especiales. . . . Por último —sigue diciendo el historiador guatemalteco— en lugar de las Cortes antiguas deseaban que se crease un Consejo Supremo Nacional, compuesto de individuos de todos los reinos de la monarquía española, tanto en Europa, como en Asia y América, eligiendo cada reino una persona que ocupase tan interesante puesto en calidad de diputado". Los derechos del ciudadano eran, desde luego, los proclamados por la Asamblea francesa en 1789.

Por tan inocua mezcla del devocionario con una edición expurgada de la Enciclopedia y el Contrato Social, que ni siquiera llegaba a formular un constitucionalismo efectivo y que hoy parecería reaccionaria a los conservadores centroamericanos, el buen Larrazábal fue encarcelado en un convento cuando Fernando VII hizo su inútil tentativa de restablecer

el absolutismo borbónico. La confusión y la falta de rumbo político eran mayores en la Corte que en Guatemala. Causa nacida muerta, el constitucionalismo de aquel momento hoy sólo puede interesar al estudiante de la historia centroamericana en cuando enseña la fascinación que las doctrinas liberales ejercían sobre los intelectuales de temperamento conservador y la futilidad que revelaban, desde su origen, tanto el liberalismo conservador, como el conservatismo liberal. No es, pues, extraño que mientras hombres inocentes e ingenuos como Peinado o Larrazábal permanecían apegados al constitucionalismo preindependiente, don Mariano de Aycinena, comerciante sagaz, lo abandonara para negociar la independencia de España con las mismas autoridades españolas, y el sabio Valle, el más consciente y a la vez el más realista de los próceres, no se comprometiera con nada de lo que no dependía de sí mismo. De modo que el clérigo Larrazábal, con toda su honestidad, no llega a ser un hombre interesante.

Si lo era, en cambio, y más que todos sus colegas, clérigos e intelectuales, el canónigo José María de Castilla, o simplemente Castilla, como se cuenta que le llamara Luis Felipe, años después de la independencia, cuando el prócer pasara por Francia y el Rey Burgués le invitara a comer. El historiador que lo dice, insinúa que ese tratamiento entrañaba un honor muy señalado, porque, como se sabe, la realeza llevaba, como propio, el nombre de su país, a la manera de los reyes de Francia que se llamaban simplemente Francia. Castilla era, en efecto, de Castilla o más exactamente de Extremadura, natural de Plasencia y de familia más o menos noble que se creía descendiente de don Pedro el Cruel. Es realmente desesperante que los más eruditos historiadores de Centro América, den tan escasos detalles sobre los antecedentes de este prócer español de la independencia centroamericana, ya que los únicos que dan no pueden ser más significativos. Se dice, por ejemplo, como si nada, o a lo sumo como un dato curioso, que fue paje de Carlos IV. Si esto es verdad, quiere decir que pudo conocer de cerca, como los pajes más que nadie solía hacerle, las intimidades de aquella familia real que Goya dejó para siempre definida en el famoso retrato de El Prado. Pudo haber conocido también al españolísimo pintor, amigo de liberales y afrancesados, y, por supuesto, a Godoy y sus relaciones con la reina María Luisa. Pero nadie ha tratado de investigar o siquiera intuir sus verdaderos sentimientos sobre aquella corte —por lo demás, no difíciles de adivinar— ni hasta dónde influirían en la formación de sus ideas independentistas. Valdría la pena averiguar si sentiría por Fernando VII algo parecido a lo que Goya dejó estampado en uno de sus retratos de este rey, en el que lo pintó con cara de camarero y, por añadidura le embadurnó de un oro escrementicio las charrateras y solapas de su casaca roja. Nada de esto se sabe de seguro. Lo cierto es que Castilla llegó a Guatemala ya formado y maduro, apenas diez años antes de la independencia, en el mismo viaje que la familia de García Granados, que luego figuraron como comerciantes

y algunos de ellos como independentistas. También es indudable que Castilla era un clérigo afrancesado. Salazar lo compara con los abates franceses del siglo XVIII, aunque salvando su moralidad. Era, según sus contemporáneos, tan sociable como simpático, un hombre de salón que no dejaba de escandalizar a los otros eclesiásticos por la desenvoltura de sus maneras y sus prácticas mundanas. Frequentaba los bailes vestido de seglar, como los otros caballeros, o simplemente se quitaba la sotana para bailar. Las damas coloniales que concurrían a tales saraos, seguramente se sorprenderían, entre escandalizadas y halagadas, de encontrarse bailando con un canónigo los vals de la época. Intelectualmente no era menos afrancesado. En su biblioteca, fuera del alcance de la Inquisición pero al alcance de sus amigos y contertulios, ocupaban un sitio preferente los enciclopedistas, empezando por el Señor de Ferney. Era, pues, un perfecto europeo de su tiempo, conocedor de la corte española y su política, incomparablemente más atrayente, como es obvio, aunque seguramente más superficial, que el ya difunto Liendo y Goicoechea o cualquier otro de los miembros del clero criollo y peninsular de la provincia de Guatemala. No se conoce o, por lo menos, no ha sido revelada todavía la intimidad de su pensamiento, pero lo más probable es que haya sido, si no el primero, uno de los primeros independentistas, y que llegara de España ya preparado para serlo. Nada más natural, por consiguiente, que él fuera el verdadero director del movimiento, el consejero y guía de los directores criollos, como Molina y Barrundia. La Tertulia Patriótica de estos y otros amigos empeñados en la independencia, se reunía en casa de Castilla y de ella surgió la idea de fundar "El Editor Constitucional", el famoso semanario dirigido por Molina, en que el canónigo español colaboraba, y desde cuyas páginas se hacía, con más o menos disimulo, la propaganda independentista. Es, además, muy significativo que el 15 de Septiembre, Castilla haya pedido antes que nadie la inmediata proclamación de la independencia. En la reunión de notables entonces efectuada, él fue el vocero del independentismo. Por lo menos en Guatemala, resulta cierto lo que decía don Carlos Pereira: que los indios hicieron la conquista y los españoles la independencia.

Los hombres de la Tertulia Patriótica, en la que se reunían con Castilla, además de Molina y Barrundia, José Vicente García Granados, comerciante español, Manuel y Juan Montúfar, Marcial Zebadua y José Beteta, sustentaban las ideas más avanzadas entonces, aunque no todos las compartieran en igual grado. Por lo menos algunos, como Manuel Montúfar y Coronado, reaccionaron después de la independencia en sentido conservador. Es posible que el mismo Castilla haya muerto desengañado, pero Molina y Barrundia —especialmente este último, debido a su temperamento— se mostraron en todo consecuentes con los principios revolucionarios de su liberalismo, ya romántico y decimonónico. Estos dos intelectuales, a la par de los comerciantes Aycinena y Beltranena, fueron los principales conductores del movimiento y de las maniobras

que produjeron pacíficamente la independencia y después de ella la guerra civil. El partido caco que ellos fundaron llevaba en su seno la división. Así se explica que mientras los intelectuales, como Barrundia y Molina, que pretendían una revolución liberal a fondo, fueran los verdaderos padres del liberalismo y de los partidos liberales centroamericanos, los comerciantes, que sólo deseaban el liberalismo económico, lo fueran de los partidos conservadores y del conservatismo. Pero entre tanto caminaban unidos en dirección a la independencia, arrastrando consigo a buena parte del clero criollo y casi toda la burguesía o nobleza guatemalteca. Entre ésta figuraban los hacendados comerciantes y hasta algunos hacendados no comerciantes. Ni la masa del clero y los hacendados, cuyas ideas no eran desde luego las liberales, sino al contrario las coloniales, sabían exactamente a dónde les llevaban sus directores. Unos y otros respondían, no obstante, con más o menos entusiasmo, a la rebeldía contra las autoridades peninsulares, lo mismo en Guatemala que en las provincias. Este fue el cebo con que se mantuvo en mayor o menor agitación a aquella sociedad conservadora, nada avezada a la política. Sin embargo, la magistral unificación de los elementos heterogéneos que integraron el partido caco —reconocidamente inferior en número al gasista de Valle— lo mismo que las finas intrigas y negociaciones que le llevaron al éxito pacífico el 15 de Septiembre de 1821, sería poco menos que inverosímil atribuir las a políticos tan inhábiles como Barrundia y Molina o cualquier otro de los intelectuales criollos de su círculo. Aunque tampoco parece probable que se deban únicamente a comerciantes más prácticos, pero igualmente unilaterales, como el llamado marqués de Aycinena. Tales maniobras, intrigas y negociaciones, apenas han sido indicadas, como de pasada, por los historiadores. Cuando se estudie bien lo que puede llamarse la política independentista, seguramente se encontrará detrás de ella, como detrás de una cortina, moviendo con sutileza casi todos los hilos, la mano refinada del canónigo Castilla.

Clérigo, intelectual, liberal, cortesano, diplomático, europeo, íntimamente relacionado con los sectores influyentes de Guatemala, empezando por las autoridades peninsulares del gobierno y la iglesia, nadie estaba en mejores condiciones que el canónigo para coordinar los movimientos más encontrados e imprimirles la conveniente dirección hacia una independencia digna de gente civilizada, como fue, en realidad, la independencia de Centro América. Todo esto, sin embargo, por lo que al propio Castilla se refiere, permanece todavía en el terreno de las conjeturas, esperando que los jóvenes investigadores lo confirmen o desvanezcan. Oficialmente, como se sabe, el director del partido caco, en que militaba don Mariano de Aycinena, era el doctor Pedro Molina, y su más ardoroso animador, don José Francisco Barrundia, posterior enemigo número uno del marqués.

CAPITULOS DE "REFLEXIONES SOBRE LA HISTORIA DE NICARAGUA" (1er TOMO)